

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, ocho (8) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA

Proceso	: Ordinario de Segunda Instancia
Demandante	: NICOLÁS HUMBERTO ARIAS ARENAS , quien se encuentra representado en el proceso por su cónyuge ÁNGELA MARÍA ARENAS PULGARÍN en calidad de Curadora
Demandada	: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-
Radicado	: 05001-31-05-010-2019-00234-01
Providencia	: Sentencia
Temas y Subtemas	: Seguridad Social –Retroactivo pensión de invalidez, pago subsidio por incapacidad, intereses moratorios-
Decisión	: Modifica Sentencia condenatoria
Sentencia No	: 229

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por las Magistradas **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ, como ponente**, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión¹:

ANTECEDENTES

¹ De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, que modificó el trámite en los Procesos de la jurisdicción Laboral.

Pretensiones:

Ordenar a Colpensiones pagar la pensión de invalidez que le viene reconociendo al señor Nicolás Humberto Arias Arenas desde el 01 de octubre de 2018, en forma retroactiva **desde el 25 de marzo de 2016**, ya que la última incapacidad fue cancelada el 24 de éste último mes y año; **intereses moratorios** del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, *“ya que se le estructuró la Invalidez, el 05 de septiembre de 2015, elevó la solicitud para la pensión de invalidez el 02 de marzo de 2017 y Colpensiones solo le vino a pagar la pensión el 05 de octubre de 2018, (fecha cuando Colpensiones notificó la resolución que ordena el ingreso a nomina), retroactiva al 01 de octubre de 2018, pero NO pago la retroactividad. Por lo tanto, le adeuda los intereses moratorios desde el 02 de marzo de 2017 (Cuatro meses después) y hasta la fecha que Colpensiones pague las sumas que adeuda.”* **o en subsidio desde el 21 de agosto de 2018, fecha cuando se entregó la Sentencia de Interdicción** y costas del proceso.

Hechos relevantes:

Afirma el apoderado de la parte actora, que el señor Nicolás Humberto Arias Arenas, **elevó la solicitud de pensión de invalidez a Colpensiones el 02 de marzo de 2017, siéndole reconocida mediante la Resolución SUB 73249 del 23 de mayo de 2017, dejando en suspenso el ingreso a nómina, hasta tanto se aportara Sentencia de interdicción**; que la señora Ángela María Arenas Pulgarín, en calidad de curadora de su cónyuge, el 21 de agosto de 2018 pidió la prestación, lo cual fue resuelto en la Resolución SUB 248920 del 20 de septiembre de 2018, reconociéndola desde el 01 de octubre del mismo año, en cuantía de \$1.603.130,00. Agrega que se requirió a la demandada para que

el reconocimiento fuera a partir del 25 de marzo de 2016, al haberse pagado la última incapacidad el 24 de marzo de 2016, conforme historial de incapacidades expedido por la EPS Sura en que se manifestó “...Es importante subrayar que de conformidad con el Artículo 25° del Decreto 19 de 2012, este tipo de documentos privados para trámites administrativos no requieren firma, ni sellos, ni requieren ningún tipo de autenticación, pues estos se presumen auténticos...”. Lo anterior fue negado por la accionada a través de la Resolución SUB 53159 del 28 de febrero de 2019.

RESPUESTA A LA DEMANDA:

COLPENSIONES a través de apoderada judicial dio respuesta², aceptó los hechos de la demanda y se opuso a todas las pretensiones de la demanda y para su defensa formuló las excepciones que denominó; inexistencia de la obligación por falta de requisitos legales para el reconocimiento de la solicitada prestación; inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; buena fe, prescripción, compensación e imposibilidad de condena en costas.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

El **Juzgado Décimo Laboral del Circuito** de Medellín, mediante Sentencia **condenó a Colpensiones a pagar la suma de \$58.792.925,00 por retroactivo de la pensión de invalidez, causado entre el 5 de septiembre de 2015 y el 30 de septiembre**

² Folios 89 a 92 del archivo 01 del expediente digital.

de 2018, descontando los períodos en los que devengó subsidios por incapacidad temporal; autorizó los descuentos con destino al sistema de seguridad social en salud. Condenó al pago de intereses moratorios, liquidados sobre el importe de las mesadas que componen el retroactivo pensional, a partir del 3 de julio de 2017 y hasta la fecha en se satisfaga la totalidad de la condena impuesta. **Condenó en Costas a cargo de la entidad demandada**, fijando las agencias en derecho en la suma de \$2.000.000,00.

RECURSO DE APELACIÓN:

La apoderada de Colpensiones inconforme con la decisión anterior presentó recurso de Apelación, pretendiendo se revoque la decisión, para lo cual argumentó que el señor Nicolás Arias Arenas contaba con más de 396 días de incapacidad, por lo que conforme a la normatividad, con posterioridad al día 180, el subsidio debe ser asumido por las administradoras de fondos de pensiones hasta el día 540; **debiéndose declarar probada la excepción de compensación en el evento que Colpensiones hubiese pagado auxilio por incapacidad** desde que se estructuró la invalidez y descontándose lo pagado, al presentarse incompatibilidad entre el subsidio y la pensión.

Solicita revocar la condena a intereses moratorios, toda vez que conforme a la jurisprudencia, no proceden el pago de los mismos cuando se incumple con los requisitos en sede administrativa, que fue lo que ocurrió en este caso, pues la entidad

no podía reconocer la pensión sin un certificado que tuviera la idoneidad de demostrar las incapacidades, pues del aportado no se tenía la certeza que lo fuera en los términos exigidos por la normatividad para proceder con el pago de la prestación; sin que la conducta de la entidad estuviera guiada por el capricho y arbitrariedad, sino por el respeto de una norma.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

El apoderado del Colpensiones, reitera los argumentos indicados tanto en la contestación a la demanda, como en el recurso de Apelación, aduciendo que **era necesario que el demandante aportara el certificado** con las características específicas del mismo, esto es, con el nombre de la entidad que certifica, identificación de la beneficiario, **relación de los periodos pagados por concepto de incapacidades médicas**, duración de las mismas, ultima cancelada por la EPS, firma e identificación de la persona competente que certifica.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de Apelación y se conocerá en el grado

jurisdicción de Consulta en favor de Colpensiones; lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15, 66A y 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Conflicto Jurídico:

El asunto a dirimir, radica en verificar si procede revocar la Sentencia de Primera Instancia; analizándose si hay lugar al reconocimiento de retroactivo pensional, al considerar la recurrente debió declararse probada la excepción de compensación en el evento que Colpensiones hubiese pagado auxilio por incapacidad desde que se estructuró la invalidez, ordenándose descontar lo pagado, al presentarse incompatibilidad entre el subsidio y la pensión; en caso de confirmarse la decisión si hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios. Se conocerá en Consulta en favor de Colpensiones, con respecto a la legalidad y cuantificación de las demás condenas impuestas en su contra.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente modificar la Sentencia de Primera Instancia; por las siguientes razones:

1° Retroactivo pensión (Apelado):

En cuanto a lo aducido por la apoderada de Colpensiones en su recurso frente al reconocimiento del retroactivo pensional, encuentra ésta Sala de Decisión que no le asiste razón, toda vez

que:

En lo que respecta al momento de reconocimiento de **la pensión de invalidez**, el inciso final del artículo 40 de la Ley 100 de 1993, preceptúa que “...**se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado**”; por su parte, **el artículo 3° del Decreto 917 de 1999**³, preceptuaba que mientras el afiliado recibiera subsidio por incapacidad temporal, no habría lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez. Y si bien es cierto, esta norma fue derogada por el Decreto 1507 de 2014; también lo es, que **el artículo 10° del Decreto 758 de 1990, preceptúa que el disfrute de la pensión de invalidez por riesgo común, se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse en forma periódica y mensual desde la fecha en que se estructure tal estado**; anotando que **cuando el beneficiario estuviere en goce de subsidio por incapacidad temporal, el pago de la pensión de invalidez comenzará a cubrirse al expirar el derecho al mencionado subsidio**.

De la normatividad anterior, se infiere que, **aunque la estructuración de la invalidez sea el momento determinante para el reconocimiento de la pensión de invalidez, cuando el afiliado ha estado protegido en virtud de la incapacidad temporal** y después se determina que el motivo originario de esa prestación económica fue la invalidez, se puede concluir que el origen de los subsidios pagados y de la invalidez fue el mismo y por consiguiente, **se cubrió a cabalidad el riesgo asegurado** durante el tiempo que se requirió para intentar la rehabilitación del afiliado.

³ Derogado por el Decreto 1507 del 12 de agosto de 2014 artículos 5° y 6°

La H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en Sentencias SL 4299 de 2022, SL 2421 de 2021, SL 1279 de 2021, en que se reitera la SL 1562 del 30 de abril de 2019 **precisó que** conforme a lo señalado en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, **se reconoce la pensión de invalidez a solicitud de parte interesada y comienza a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado**, sin que el hecho de que el afiliado hubiera continuado cotizando y se encuentre afiliado a la seguridad social, impida que se reconozca la prestación desde la estructuración de la invalidez, **situación diferente es que se hubiera recibido subsidio por incapacidad temporal, eventualidad en la cual no habrá lugar a prestación por invalidez, mientras se recibe dicho subsidio.**

No es objeto de discusión en esta Segunda Instancia, al encontrarse aceptado por la accionada al dar respuesta a la demanda y acreditado con la prueba documental, que el 11 de noviembre de 2016 **Colpensiones dictaminó al demandante una pérdida de capacidad laboral de origen común del 78,32%, estructurada el 5 de septiembre de 2015⁴**; que el 2 de marzo de 2017 el afiliado solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual le fue reconocida por mediante la Resolución SUB 73249 del 23 de mayo del mismo año, dejando la inclusión en nómina hasta tanto se allegara la *“Sentencia de interdicción; acta de aceptación, discernimiento y posesión del puesto de curador y Registro Civil de Nacimiento de Arias Arenas Nicolás Humberto con la correspondiente nota marginal de inscripción de la designación de curador”⁵*; que el 21 de agosto de 2018, la señora Ángela María Arenas Pulgarín, en calidad de Curadora

⁴ Folios 56 a 60 del archivo 01 del expediente digital.

⁵ Folios 9 a 17 del archivo 01 del expediente digital.

del afiliado Nicolás Humberto Arias Arenas, pidió el reconocimiento de la pensión de invalidez en favor de éste, allegando Sentencia mediante la cual el Juzgado 9 de familia de Oralidad de Medellín decretó la interdicción a causa de discapacidad mental absoluta; petición que fue resuelta mediante la Resolución SUB 248920 del 20 de septiembre de 2018, concediendo la pensión a partir del 1° de octubre del mismo año, argumentando que se reconocía a partir de dicha fecha, toda vez que el certificado expedido por la EPS Sura, en el que se indica que la última incapacidad pagada fue el 24 de marzo de 2016 *“no cuenta con las características específicas las cuales se describen a continuación: Nombre de la entidad que certifica, identificación de la beneficiaria o paciente, relación de los periodos pagados por concepto de Incapacidades médicas, duración o días de incapacidad, ultima incapacidad médica cancelada por la EPS, firma e identificación de la persona competente de quien certifica”*⁶; frente a la decisión anterior se formuló recurso de reposición, solicitándose la pensión a partir del 25 de marzo de 2016, petición resuelta negativamente mediante la Resolución SUB 53159 del 28 de 2019⁷.

Lo aducido por la entidad demandada para negar el reconocimiento del retroactivo pensional no lo comparte esta Colegiatura, toda vez que en lo que tiene que ver con la exigencia inicial de realizar el trámite para en últimas nombrar un Curador al demandante es un requerimiento que si bien excepcionalmente puede ser viable, **según lo indicado por la H. C. Constitucional en la Sentencia T-185 del 8 de mayo de 2018,** también lo es que según la misma providencia en esos casos **a efectos de garantizar el derecho fundamental al mínimo vital del afectado, debe ordenarse el pago de las mesadas**

⁶ Folios 19 a 33 del archivo 01 del expediente digital.

⁷ Folios 40 a 54 del archivo 01 del expediente digital.

pensionales de forma directa o por intermedio de su cónyuge, compañero permanente o pariente, siempre comunicando la decisión al Defensor de Familia para que ejerza las labores de supervisión correspondientes.

Y respecto a no darle valor probatorio al certificado expedido por la EPS Sura, tampoco es de recibo, teniendo en cuenta que **estamos ante un sistema de seguridad social integral, que permite la verificación de datos de sus afiliados, contando Colpensiones con las herramientas administrativas para realizar la consulta o verificar con la EPS Sura si alguna duda subsistía respecto a las incapacidades del demandante**, debiendo prevalecer derechos de rango constitucional fundamental como el de la seguridad social.

Recuérdese que estas entidades manejan y administran derechos fundamentales de las personas y están obligadas hasta dar el buen consejo, máxime a cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, en forma oportuna, con calidad, evitando tramitologías innecesarias.

Sobre el tema, la H. Corte Constitucional en la Sentencia T-523 de 2020, señaló que ***“el sistema de seguridad social fue concebido como un “engranaje” para materializar sus derechos constitucionales fundamentales de manera continua entre las distintas fases y etapas a cargo de los diferentes actores del mismo sistema, siendo indispensable para ello la comunicación constante entre las referidas entidades.*”** (Negrillas fuera del texto).

No asistiéndole tampoco razón a la recurrente en cuanto aduce en su apelación que el señor Nicolás Arias Arenas

contaba con más de 396 días de incapacidad, por lo que conforme a la normatividad, con posterioridad al día 180, el subsidio debe ser asumido por las administradoras de fondos de pensiones hasta el día 540; debiéndose declarar probada la excepción de compensación en el evento que Colpensiones hubiese pagado auxilio por incapacidad desde que se estructuró la invalidez, toda vez que **no presentó, ni obra prueba alguna en el proceso que dé cuenta que la entidad demandada, como administradora de un fondo de pensiones, haya efectuado pago alguno por subsidio al demandante** por superarse 180 de incapacidad del mismo, **lo cual era su carga probatoria.**

De acuerdo a lo expuesto y precisado por la jurisprudencia la entidad demandada debió reconocer el retroactivo pensional pretendido en este proceso, tal como acertadamente lo estableció el Juez de Primera Instancia, procediendo confirmar la decisión.

2° En lo relativo a la fecha de reconocimiento del retroactivo pensional, argumentó el *a quo*, que si bien conforme a la normatividad no puede ser amparado un riesgo por prestaciones distintas, por lo que una persona que al momento de estructuración de la invalidez disfruta del subsidio por incapacidad, debe dejar de percibirlo para acceder a la pensión respectiva al ser excluyentes, sin que ello signifique que el usuario no pueda acceder al retroactivo de la prestación si el subsidio no se pagó de manera permanente, procediendo en tal caso descontar los períodos en que se recibió el mismo con el fin de no recibirse simultáneamente los dos beneficios, pues en justicia se perdería un derecho mayor como lo es el de pensión de invalidez; reconoció el retroactivo pensional desde el 5 de septiembre de 2015, fecha de estructuración de la invalidez, en vista que la EPS Sura, certificó pago de incapacidades intermitentes, pues entre el 9 de septiembre de 2015 y el 7 de noviembre de 2016, sólo se efectuaron tres pagos efectivos, autorizando a Colpensiones descontar del retroactivo los subsidios cancelados; **decisión**

que comparte esta Sala de Decisión toda vez que, en respuesta al Juzgado, la EPS SURA, certificó sobre las incapacidades que se dieron respecto del señor Nicolás Humberto Arias Arenas entre el 9 de septiembre de 2015 y el 7 de noviembre de 2016⁸, constatándose que en dicho período sólo se efectuó pago de subsidio en tres (3) oportunidades, así: por la incapacidad del 18 al 27 de septiembre del año 2015, la suma de \$289.246,00; del 28 de septiembre al 12 de octubre de la misma anualidad, la suma de \$542.336,00 y entre el 2 al 24 de marzo del año 2016, \$460.983,00; veamos gráficamente lo anterior:

DETALLE DE INCAPACIDADES								
Número Incapacidad	Fecha Inicio	Fecha Término	Origen	Código Diagnóstico	Duración	Clasificación	Valor Pagado	IBC
0 - 18967556	09/09/2015	10/09/2015	ENFERMEDAD GENERAL	J350	2	INICIAL	0	0
0 - 19009713	18/09/2015	27/09/2015	ENFERMEDAD GENERAL	D420	10	INICIAL	289,246	1,627,000
0 - 19052853	28/09/2015	12/10/2015	ENFERMEDAD GENERAL	D420	15	PRORROGA	542,336	1,627,000
0 - 19640500	13/10/2015	27/10/2015	ENFERMEDAD GENERAL	C710	15	PRORROGA	0	1,627,000
0 - 19640518	28/10/2015	25/11/2015	ENFERMEDAD GENERAL	C711	29	PRORROGA	0	1,627,000
0 - 19640530	26/11/2015	25/12/2015	ENFERMEDAD GENERAL	C710	30	PRORROGA	0	1,627,000
0 - 19640841	27/12/2015	25/01/2016	ENFERMEDAD GENERAL	C711	30	PRORROGA	0	1,627,000
0 - 19640850	28/01/2016	31/01/2016	ENFERMEDAD GENERAL	C711	4	PRORROGA	0	1,627,000
0 - 19640858	01/02/2016	01/03/2016	ENFERMEDAD GENERAL	C711	30	PRORROGA	0	1,627,000
0 - 19726440	02/03/2016	24/03/2016	ENFERMEDAD GENERAL	C711	23	PRORROGA	460,983	1,627,000
0 - 19825857	25/03/2016	23/04/2016	ENFERMEDAD GENERAL	C711	30	PRORROGA	0	0
0 - 20167986	25/04/2016	24/05/2016	ENFERMEDAD GENERAL	C719	30	PRORROGA	0	0
0 - 20168006	31/05/2016	29/06/2016	ENFERMEDAD GENERAL	C719	30	PRORROGA	0	0
0 - 20386710	05/07/2016	03/08/2016	ENFERMEDAD GENERAL	C711	30	PRORROGA	0	0
0 - 20386711	10/08/2016	08/09/2016	ENFERMEDAD GENERAL	C711	30	PRORROGA	0	0
0 - 20547607	09/09/2016	08/10/2016	ENFERMEDAD GENERAL	C711	30	PRORROGA	0	0
0 - 20687556	09/10/2016	07/11/2016	ENFERMEDAD GENERAL	C711	30	PRORROGA	0	0

Por tanto, tal como lo adujo el *a quo*, **el pensionado no se puede ver abocado a la pérdida de un derecho mayor como lo es el disfrute de pensión de invalidez**, a lo que debe agregarse constituye un derecho legal, pues al tenor del artículo 40 de la Ley 100 de 1993, **el pago de la pensión de invalidez debe realizarse desde la fecha de estructuración de la misma y los limitantes**,

⁸ Folios 3 a 4 del archivo 11 del expediente digital.

12

según los cuales no procede mientras el afiliado estuviere disfrutando subsidio por incapacidad laboral, no pueden hacerse extensivos a los casos en que no se cumple con el pago de los mismos por parte de las EPS; máxime en este caso que se trata de una persona con una pérdida de capacidad laboral del 78,32% y necesita curador, en estado de debilidad manifiesta, que tiene una especial de protección legal y constitucional a través del resguardo de sus derechos fundamentales a la seguridad social, la vida digna, el mínimo vital y dignidad humana y además, y no menos importante, es el hecho de que en nada se ve afectada la sostenibilidad del sistema.

Por lo cual, atendiendo a que no se dio el pago de todas las incapacidades causadas durante más de un año, lo procedente es el reconocimiento del retroactivo pensional desde la fecha de estructuración de la invalidez, esto es, desde el 5 de septiembre de 2015, descontándose los tres (3) subsidios por incapacidad que fueron cancelados por la EPS; anotándose que no se configuró el fenómeno jurídico de la prescripción, toda vez que el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que las acciones laborales prescriben en tres (3) años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible y el simple reclamo escrito interrumpirá la prescripción, por un lapso igual.

Además, **respecto de la pensión de invalidez,** jurisprudencialmente **se tiene precisado que el término de prescripción empieza a correr desde cuando queda en firme dicho estado;** así lo ha señalado la Sala de Casación Laboral de la

H. Corte Suprema de Justicia, entre otras, en las Sentencias SL 1562 de 2019; SL 4174 de 2018 y la SL 5703 de 2015. En igual sentido la H. Corte Constitucional en Sentencia C-792 del 20 de septiembre de 2006, declaró condicionalmente exequible la expresión “...o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta...”, contenida en el artículo 6° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el entendido que el agotamiento de la reclamación administrativa por virtud del silencio administrativo negativo, es optativo del administrado, de tal manera que si decide esperar una respuesta formal y expresa de la Administración, la suspensión del término de prescripción de la respectiva acción se extenderá por el tiempo que tome ésta en responder; posición acogida por la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, entre otras, en las Sentencias SL 5695 y SL 5262 ambas del 2018, en las cuales indicó que mientras se encuentre pendiente la respuesta o el agotamiento de la vía gubernativa, el término prescriptivo se considera suspendido.

En el presente caso, el dictamen fue practicado al señor Nicolás Humberto Arias Arenas el 11 de noviembre de 2016⁹, sin existir constancia de notificación del mismo; presentándose reclamación de la pensión de invalidez el 2 de marzo de 2017, tal como se constata en la Resolución SUB 73249 del 23 de mayo del mismo año¹⁰, que interrumpe la prescripción por un período igual, esto es, de tres (3) años; **siendo agotada la vía administrativa con la Resolución SUB 53159 del 28 de 2019¹¹, por lo que al presentarse demanda el 11 de abril del mismo año¹², no se**

⁹ Folios 56 a 60 del archivo 01 del expediente digital.

¹⁰ Folios 9 a 17 del archivo 01 del expediente digital.

¹¹ Folios 40 a 54 del archivo 01 del expediente digital.

¹² Acta reparto obrante en el archivo 00 del expediente digital.

configuró el fenómeno jurídico de la prescripción.

Así las cosas, **se confirmará la decisión en cuanto a la fecha de reconocimiento del retroactivo pensional**, con la autorización a Colpensiones de descontar el valor de los subsidios cancelados.

3° En Consulta: Se modificará la decisión de Primera Instancia en cuanto a la cuantía del retroactivo reconocido, en vista que el Juzgado de Primera Instancia tomó para el año 2015 como valor de la mesada la suma de \$1.377.206,00, cuando en realidad debe ser \$1.364.049,00.

Por tanto, el valor del retroactivo causado entre el 5 de septiembre de 2015 y el 30 de septiembre del año 2018, descontándose el valor del subsidio por incapacidad pagado al demandante (\$1.292.565,00), **asciende a la suma de \$58.728.898,00.**

Mesadas causadas	Valor mesada	Número de mesadas	Total
2015	\$1.364.049,00	26 días y 4 mesadas	\$ 6.638.364,00
2016	\$1.456.395,00	13	\$18.933.135,00
2017	\$1.540.138,00	13	\$20.021.794,00
2018	\$1.603.130,00	9	\$14.428.170,00
SUB TOTAL			\$60.021.463,00
MENOS SUBSIDIO			\$ 1.292.565,00
GRAN TOTAL			\$58.728.898,00

4° Intereses moratorios (Apelado):

Pretende la recurrente se revoque la condena a intereses moratorios, toda vez que *no procede el pago de los mismos cuando se incumple con los requisitos en sede administrativa, que fue lo que ocurrió en este caso, pues la entidad no podía reconocer la pensión sin un certificado que tuviera la idoneidad de demostrar las incapacidades, pues del aportado no se tenía la certeza que lo fuera en los términos exigidos por la normatividad para proceder con el pago de la prestación; sin que la conducta de la entidad estuviera guiada por el capricho y arbitrariedad, sino por el respeto de una norma;* **encontrando esta Colegiatura no procedente lo pretendido**, como se explica a continuación:

Los intereses moratorios se encuentran consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, estableciendo que en caso de retardo en el pago de las mesadas pensionales la entidad responsable los reconocerá y pagará a la tasa vigente en que se efectuó el pago. Y el Decreto 656 de 1994, en su artículo 19, preceptúa que el Gobierno Nacional, establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras **decidan acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones, entre otras la de invalidez, sin que en ningún caso puedan exceder de cuatro (4) meses**¹³; concluyéndose de lo anterior, que las administradoras de pensiones, tienen un plazo de máximo para decidir si reconocen y pagan las prestaciones solicitadas, pero si se niega el derecho solicitado y luego se determina judicialmente que hay lugar a la pensión de invalidez o supera el término antes indicado, se presenta un retraso injustificado, causándose intereses moratorios.

¹³ “ARTICULO 19. El Gobierno Nacional establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso puedan exceder de cuatro (4) meses.”

En el asunto debatido, tal como se explicó en los acápites anteriores, no son de recibo los argumentos esgrimidos por la entidad para haber negado el reconocimiento de la pensión desde la fecha de estructuración de la invalidez, **sin que se constate una justificación de Colpensiones en su omisión de negar el retroactivo**, incurriendo en un retardo que da lugar a los intereses moratorios; **procediendo confirmar la decisión de Primera Instancia.**

5° Se confirma la decisión en cuanto a la fecha de reconocimiento de los intereses moratorios (Consulta), esto es, pasados cuatro (4) meses desde la fecha de reclamación, que en este caso lo fue el 2 de marzo de 2017, causándose los mismos a partir del 3 de julio del mismo año.

Corolario de lo expuesto, **se modificará la decisión de Primera Instancia, conforme lo decidido en precedencia.**

COSTAS:

Se condenará en Costas en esta Segunda Instancia a cargo de Colpensiones, al no haber prosperado el recurso de Apelación, fijándose las agencias en derecho en cuantía equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (\$1.160.000,00) en favor de la parte demandante; de conformidad con lo establecido en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso y Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de Primera Instancia, que por vía de **Apelación** y en el grado jurisdiccional de **Consulta** se revisa en favor de Colpensiones, en cuanto al valor del retroactivo a pagar, el cual queda en la suma de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L (\$58.728.898,00) por el período comprendido entre el 5 de septiembre de 2015 y el 30 de septiembre del año 2018**; lo anterior de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Providencia.

SEGUNDO: Se CONDENA en Costas en Segunda Instancia a cargo de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-**, fijándose las agencias en derecho la suma de **UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS M/L (\$1.160.000,00)** en favor del señor **NICOLÁS HUMBERTO ARIAS ARENAS**, representado por su cónyuge Ángela María Arenas

Pulgarín, en calidad de Curadora; según lo indicado en la parte motiva.

TERCERO: Lo resuelto se notifica por **EDICTO**, en el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

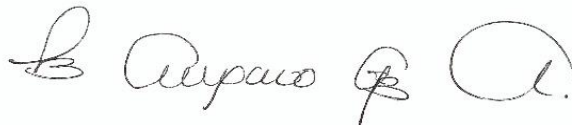
Las Magistradas,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ
Magistrada Ponente



LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SECRETARIA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso	: Ordinario de Segunda Instancia
Demandante	: NICOLÁS HUMBERTO ARIAS ARENAS , quien se encuentra representado en el proceso por su cónyuge ÁNGELA MARÍA ARENAS PULGARÍN en calidad de Curadora
Demandada	: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-
Radicado	: 05001-31-05-010-2019-00234-01
Providencia	: Sentencia
Temas y Subtemas	: Seguridad Social –Retroactivo pensión de invalidez, pago subsidio por incapacidad, intereses moratorios-
Decisión	: Modifica Sentencia condenatoria
Sentencia No	: 229

FECHA SENTENCIA: 8 de noviembre de 2023

Fijado viernes 10 de noviembre de 2023 a las 8:00 a.m.

Desfijado viernes 10 de noviembre de 2023 a las 5:00 p.m.

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS

Secretario